laSegunda

Fecha: 29/05/2025 Audiencia: 33.709 Sección: OPINION
Vpe: $384.068 Tirada: 11.692 Frecuencia: DIARIO
Vpe pág: $1.776.800 Difusión: 11.692
Vpe portada: $1.776.800 Ocupación: 21,62%

Ignacio Imas A.
Gerente Imaginaccion Asuntos Públicos

No sirve un Estado débil

Estamos molestos, incómodos, perplejos. Las faltas a la probidad – en municipalidades, gobiernos regionales y el nivel central – han golpeado duramente la credibilidad institucional. No se trata solo de actos irregulares: se ha quebrado un principio esencial sobre el que se sostiene toda convivencia democrática: la confianza.

Hemos conocido el abuso sistemático en el uso de licencias médicas por parte de miles de personas en el sector público. Ya no se trata únicamente de personalidades, sino de personas comunes que encontraron la forma de manipular el sistema a su favor. Este fenómeno masivo desafía un paradigma arraigado en nuestro imaginario colectivo: la idea de que Chile no es un país corrupto parece haberse resquebrajado. La cultura del abuso dejó de ser la excepción.

La ética pública se ha debilitado, y con ella, el Estado como institución paga un alto costo. Es importante recordarlo: el Estado es el espacio donde se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas. Es también donde se dictan normas, se administran servicios esenciales, y se canalizan recursos para quienes no pueden acceder a ellos por sus propios medios. Cuando ese espacio se corrompe o se debilita, se erosiona la legitimidad del propio sistema democrático.

Por eso, lo que está en juego va mucho más allá de juzgar individualmente a quienes cometen irregularidades. Se trata de fortalecer la integridad del Estado, y proteger el espacio donde se administra el bien común, se gestionan recursos públicos y se garantiza que las instituciones operen al servicio de toda la ciudadanía, no de unos pocos. Si ese espacio pierde credibilidad, no solo se deteriora la fe en las personas que lo habitan, sino en la institucionalidad misma sobre la que se sostiene nuestra democracia.

Corresponde, entonces, elevar el nivel de la conversación pública. El riesgo de no hacerlo es claro: más desconfianza, más distancia entre la ciudadanía y las instituciones, y más espacio para soluciones simplistas que no resuelven nada y agravan todo.

Lo que enfrentamos no es un episodio aislado. Es una señal de alerta sobre el sentido mismo del Estado: como garante de derechos, como articulador del bien común, y como espacio legítimo para la deliberación democrática. Por eso, a nadie le sirve un Estado débil. Porque así, simplemente, no hay política pública posible, ni futuro en conjunto.